

Similitudes y Diferencias Típicas entre el abuso de autoridad y el incumplimiento de Deberes en el código Penal de Costa Rica

Álvaro Burgos M.¹

Resumen

Los delitos de Abuso de Autoridad e Incumplimiento de Funciones son frecuentemente confundidos en razón de su tipicidad. El presente artículo pretende poner de manifiesto las principales similitudes y diferencias entre ambos tipos penales, haciendo referencia directa igualmente a la jurisprudencia correspondiente que ejemplifica sus características particulares en su aplicación patria.

Palabras clave: funcionario público, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes.

¹ . Doctor en Derecho Penal y Criminología, máster en Psicología Forense, especialista en Ciencias Penales. juez superior penal juvenil y juez de juicio del II Circuito Judicial de San José, catedrático de Derecho Penal Especial y Criminología de la Maestría en Ciencias Penales de la UCR, profesor del Programa Doctoral en Derecho Penal de la U. Escuela Libre de Derecho y de la Maestría en Psicología Forense de la UNIBE.

Sumario

Introducción

Capítulo I - Antecedentes

Generalidades

A.Funcionario y funcionaria públicos

Capítulo II - Figuras Típicas

A.Abuso de autoridad

a.El abuso de autoridad según las personas estudiasas del Derecho

b.Análisis del tipo penal

B.Incumplimiento de deberes

a.Análisis del tipo penal

Capítulo III - Análisis Jurisprudencial

Conc

lusio

nes

Bibli

ogra

fía

Introducción

El presente trabajo desarrolla dos de los tipos penales contenidos en nuestro Código Penal en los Artículos 331.- Abuso de Autoridad y 332.- Incumplimiento de deberes.

Iniciaremos con un capítulo introductorio sobre los antecedentes, para ubicarnos respecto de la conceptualización de las personas protagonistas de los tipos penales analizados, la funcionaria y el funcionario públicos, ya que estos dos tipos penales son parte de los llamados ***delitos contra los deberes de la función pública.***

En el Capítulo Segundo, analizaremos las figuras típicas, el cual se ha dividido en dos acápites o secciones, la primera trata sobre la conceptualización y análisis del tipo penal contemplado en el Artículo 331 de nuestro Código Penal, llamado ***Abuso de Autoridad***.

En la segunda sección, desarrollaremos el tipo penal del Artículo 332, el ***Incumplimiento de Deberes*** y su respectivo análisis del tipo.

Finalmente, en el Tercer Capítulo, desplegaremos un análisis de algunas de las sentencias costarricenses encontradas con referencia a estos artículos, para analizar el criterio de nuestra Sala Tercera con relación al tema motivo del presente trabajo.

Capítulo I - Antecedentes A.Generalidades

Los delitos de los que hablamos son un intento de las normas penales por mantener el orden en la

Administración Pública, tanto de parte de sus funcionarios y funcionarias

como de las personas empleadas de la misma. Sin embargo, estas figuras a las que nos referimos son solo un puente para la comisión de un hecho delictuoso.

En ese sentido, cabe mencionar delitos tales como: el prevaricato, allanamiento de morada, aquellos como el cohecho y el peculado. No obstante, puede darse el caso en que ese abuso de autoridad sea más bien una circunstancia que de carácter de agravado al hecho cometido por la persona funcionaria.

En nuestra legislación, al igual que en la de Argentina, se les da una tutela legal aparte a los delitos en estudio, dándoles así preferencia respecto de otros bienes jurídicos puestos en peligro.

Para Carrara, la objetividad de esta infracción presenta dos situaciones; una de carácter positivo que será el hecho de basta con el simple abuso de autoridad, la persona funcionaria será sancionada penalmente y no solo con una mera llamada de atención; el otro, de carácter negativo que, según el autor supra citado, se referirá al hecho de que la pena sancionatoria, no va en el sentido de la falta que cometió para su favorecimiento o del abuso al poder que le confirió la Administración Pública, sino que se refiere al hecho del perjuicio que ese abuso pueda causar es decir, dependerá de los resultados.

Tutelan de manera general la Administración Pública como bien jurídico, y desde una óptica más particular, su finalidad es dar garantía de que los actos de la administración efectuados por sus funcionarios y funcionarias son legales y regulares.

Nuestro Código Penal contempla además otra figura con un corte similar; nos referimos al incumplimiento de deberes. Este tipo penal puede efectuarse mediante dos situaciones; por acción, entendiendo por esta el efecto de realizar una determinada conducta; u

omisión, definido como efecto de omitir, dejar de hacer. Respecto a estos dos tipos de conductas, González Roura indica que tanto abusa de su autoridad quien excede su actuar como quien lo omite.

B. El funcionario y la funcionara públicos

La persona funcionaria pública es aquel **trabajador** o aquella trabajadora que desempeña funciones en un organismo del **Estado**, el cual puede representar a cualquier **poder público** que exista, ya sea el **Legislativo**, el **Ejecutivo** o el **Judicial**.

Habitualmente estos organismos son el **Gobierno**, el **Congreso** o **Parlamento**, los tribunales, la Administración Pública y, en general, todos aquellos organismos que no pertenezcan al sector privado.

En nuestro ordenamiento jurídico, encontramos esta definición contemplada en el Artículo 111. de la Ley General de la Administración Pública, el cual versa:

Artículo 111.-

“1. Es servidor público la persona que presta servicios a la Administración o a nombre y por cuenta de ésta, como parte de su organización, en virtud de un acto válido y eficaz de investidura, con entera independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado, permanente o público de la actividad respectiva.

2. A este efecto consideranse equivalentes los términos “funcionario público”, “servidor público”, “empleado público”, “encargado de servicio público” y demás similares, y el régimen de sus relaciones será el mismo para todos, salvo que la naturaleza de la situación indique lo contrario.

3. No se consideran servidores públicos los empleados de empresas o servicios económicos del Estado encargados de gestiones sometidas al derecho común”.

Por otra parte, cabe destacar que las personas funcionarias públicas tienen un deber de obediencia, el cual se encuentra consignado en el Artículo 107 y todas sus actuaciones deben velar por el interés público, aun por encima del particular Artículo 113 del texto normativo supra citado y dispone:

Artículo 107.- Deber de obediencia

“1. Todo servidor público estará obligado a obedecer las órdenes particulares, instrucciones o circulares del superior, con las limitaciones que establece este Capítulo.

2. El servidor no estará obligado a obedecer cuando el acto no provenga de un superior jerárquico sea o no inmediato.”

Artículo 113.- Priva el interés Público

“1. El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que satisfagan primordialmente el interés público, el cual será considerado como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados.

2. El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando pueda estar en conflicto.

3. En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta, en primer lugar, los valores de seguridad jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a los que no puede en ningún caso anteponerse la mera conveniencia”.

Definidos ya estos conceptos respecto a la función pública, la persona funcionaria pública y sus deberes u obligaciones y su correcta actuación, es más simple comprender los tipos penales que a continuación se analizan. **Capítulo II - Figuras Típicas**

A. Abuso de autoridad

El abuso de autoridad es asociado comúnmente al uso de un poder otorgado por la posesión de un cargo o función; pero de forma tal que este uso no está dirigido a cumplir las funciones atribuidas a ese cargo, sino a satisfacer intereses personales del individuo que lo ejerce. Por otro lado, el abuso de autoridad es reconocido en figuras que ostentan poder físico en la sociedad, como policías o guardias de seguridad, quienes estarían abusando de su autoridad cuando arrestan a una persona sin darle a la misma opción al diálogo.

1. El abuso de autoridad según las personas estudiosas del Derecho

En el ***Derecho Administrativo*** y como concepto empleado comúnmente, el abuso de autoridad o sus equivalentes, como abuso de poder o ***abuso de las funciones públicas***, es el ejercicio abusivo de una función pública.

El ***Derecho Penal*** contempla el abuso de autoridad en sentido lato, como la figura delictiva que comete la persona investida de poderes públicos que realice en su gestión actos contrarios a los deberes que le impone la ley, por lo que aflige la libertad de las personas, las intimida o de cualquier manera les causa vejámenes, agravios morales o materiales.

En sentido estricto, se entiende como el delito doloso que comete la persona que actúa en calidad de funcionaria pública y dicta resoluciones u órdenes contrarias a las Constituciones o leyes nacionales o provinciales, o ejecuta las órdenes o resoluciones de esta clase existentes, o no ejecuta las leyes cuyo cumplimiento le incumbe. El sujeto pasivo de este delito es la Administración Pública, y no es necesario que se le haya causado un daño material.

Este delito tiene varios subtipos entre los que se destacan:

- Prevaricación
- Cohecho
- Tráfico de influencias
- Malversación de fondos públicos
- Corrupción

B. Análisis del tipo penal

En nuestra legislación, encontramos contemplado este delito en el Artículo 331 del Código Penal, el cual dispone de la siguiente manera:

Artículo 331.-

“Será reprimido con prisión de tres meses a dos años, el funcionario público, que, abusando de su cargo, ordenare o cometiere cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien.”

Su punibilidad se basa en el hecho de realizar una conducta contraria a lo que la ley permite; es decir, omitiendo hacer lo que por ley le es obligatorio o realizando conductas que le son prohibidas en la misma ley.

En la doctrina existe una disyuntiva respecto al verdadero sentido en el que se utiliza el término ley. Para algunos como Moreno, la expresión “ley” es de carácter formal; para otros como Nuñez, Laje Anaya citado por Creus, la ley se refiere también a los reglamentos, ordenanzas, etc.

A pesar de que el criterio anterior parece ser el más acertado, cabe mencionar que no todos los reglamentos pueden ser objeto de este tipo penal, sino que únicamente existirá el delito en aquellos que deban ser acatados por las personas funcionarias públicas que como veremos son los sujetos activos de este tipo.

Para que se configure este delito, la acción debe ser cometida en el ejercicio de la función propia que reviste a ese sujeto como funcionario público. El abuso de autoridad consiste en el uso inapropiado de la conducta que le fue encomendada en razón del cargo.

En este delito, debe guardarse cuidado por cuanto presenta un carácter subsidiario, ya que existe una serie de otros delitos que constituyen abuso de autoridad. Sin embargo, se han descrito como figuras independientes. Así encontramos otras formas especiales, tales como: el prevaricato, la corrupción, la malversación, el allanamiento de morada. Por ello se indica que es un delito subsidiario, por cuanto primero se requiere inspeccionar todos los demás artículos que se componen en abuso de autoridad, para ver si ese abuso de autoridad podría encuadrar en la conducta de alguno de esos delitos autónomos.

Aquí el sujeto activo es necesariamente una persona funcionaria pública. Evidentemente no podría figurar como sujeto activo un particular, pero cabe aclarar que se permiten todas las formas de participación en este delito (co-autoría, cómplice, etc.), mas siempre se pedirá como requisito la existencia de una persona funcionaria pública.

El sujeto pasivo es el Estado, por cuanto el abuso de autoridad supone una irregularidad o una ilicitud en el funcionamiento de la Administración Pública, mas no se debe desconocer que en un abuso de autoridad, puede resultar también una persona particular ofendida que tendría el carácter de perjudicado. *(El estado es sujeto pasivo primordial, sin embargo, se muestran los y las particulares como sujetos pasivos secundarios. Recordemos que existen personas ofendidas, representadas por aquel sujeto sobre quien recae el perjuicio de una acción delictiva, sea por muerte, lesiones, violación, etc., además de otros casos donde las personas afectadas no tienen o no les recae directamente el hecho, a quienes se denomina personas perjudicadas).*

Del texto se desglosa el concepto de arbitrario, el cual es un acto ilegal, pero además se considera como acto arbitrario el uso incorrecto o improcedente de una facultad jurídica. Las personas funcionarias públicas tienen facultades que ejerce en el campo de su competencia.

Este carácter arbitrario puede presentarse tanto como elemento objetivo como elemento subjetivo; dentro de esta figura, por ejemplo, se presentan casos en que la persona funcionaria pública dispone de poderes discrecionales y los emplea en funciones a las que la ley persigue por sectarismo político, religioso, por corrupción, etc., y es cuando incurre en abuso de autoridad.

En la comisión de este delito, se presenta el ejercicio de dos tipos de facultades o hechos:

- I. Se ejercita una facultad aparente. *(Es decir la persona funcionaria pública no tiene facultad para actuar en una forma determinada, porque no tiene competencia para hacerlo y aun así actúa).*
- II. Aquí se realiza el ejercicio de una facultad innegable, pero en condiciones falsas. *(Aquí la persona funcionaria tiene la facultad, pero hace uso o la ejercita en condiciones falsas).*

En ambos de los anteriores casos, debemos entender que surge una especie de falsedad; en el primer caso, porque no se tiene la facultad; en el segundo, por cuanto a pesar de que se tiene esa facultad, se fundamenta en hechos falsos. Indican los autores que en un caso se afirma o se ejerce un poder que se sabe ilegal y, en el otro caso, se afirman o suponen hechos falsos, como condiciones del acto de autoridad.

Se debe insistir en el carácter subsidiario de esta figura, tal como se explicó al principio de este artículo. Es de carácter doloso, ya que el aspecto volitivo juega un importante papel. La persona funcionaria debe querer oponerse a lo que la ley establece, aprovechándose de su cargo, por lo que cabe señalar que se configura con el dolo directo. Por tanto, no puede darse un abuso de autoridad de carácter culposo. Sin embargo, es importante analizar debidamente la actuación de la persona funcionaria para identificar cuándo se está frente a un abuso de autoridad que realmente está lesionando a la persona administrada que, en este caso, sería la víctima, y cuándo la persona funcionaria pública está únicamente haciendo alarde de su posición jerárquica, sin perjuicio alguno.

Este delito de abuso de autoridad desaparece por el error, tanto de hecho como de derecho, por cuanto consiste en una causa de inculpabilidad, por lo que no hay responsabilidad penal.

Respecto a su consumación, cabe mencionar que es un delito de mera resultado, ya que no basta con el hecho de que exista un abuso de autoridad por parte de la persona funcionaria. El artículo es muy claro al indicar ***"[...] en perjuicio de los derechos de alguien"***.

Del texto de nuestro código se desprenden solamente dos verbos activos, ***"ordenare o cometiere"***. En otras legislaciones como la de Argentina, se comprende también ***"El dictado de resoluciones arbitrarias"***; mas de acuerdo con nuestra ley, esto encuadraría como un prevaricato. Esa diferencia podría tener fundamento en el hecho de que en Argentina, algunas funciones jurisdiccionales, propias del Poder Judicial, se ventilan a nivel administrativo, ya sea que se lo aplican a aquella persona funcionaria pública que dicte una resolución, con la excepción de que no debe ser juez o jueza.

B. Incumplimiento de deberes

Se puede definir incumplimiento como la falta de cumplimiento u omisión. Por otro lado, se entiende por deber aquello a que está obligado el ser humano por los preceptos religiosos o por las leyes naturales o positivas.

Este incumplimiento de los deberes genera la responsabilidad penal. Existen determinados delitos que tienen como sujeto activo a la persona funcionaria pública. Son los llamados delitos especiales propios. En estos, la autoría se limita al círculo de personas calificadas o personas autoras idóneas mencionadas en el tipo penal. Vale señalar que a los fines de su tipificación, necesariamente se estará en presencia de un acto irregular previsto y penado en el código respectivo y cometido por una persona funcionaria o empleada pública.

Este tipo de responsabilidad siempre es personal. Siempre esta acción se lleva adelante en sede judicial. Los preceptos del Derecho Penal que regulan los delitos de los funcionarios y las funcionarias públicos tienen como fin, lo mismo que en el Derecho disciplinario, mantener a las personas funcionarias públicas en la observancia de sus deberes y contribuir a la mejor organización del servicio público.

Este tipo penal está compuesto por acciones típicas previstas que denotan omisiones, sean estas omitir, retardar. Por otra parte, encontramos otra de las acciones que consiste en rehusar hacer, violentando el mandato existente respecto a la realización de dicha conducta. Respecto a estas acciones, es prudente definir las de la siguiente manera: omite quien no lleva a cabo el acto que debía realizar; se rehúsa a hacer quien ante el pedido de determinada conducta, se niega a su realización, y retarda quien no realiza la acción en la oportunidad respectiva, sino que la deja pasar. De las tres, la más compleja es la de rehusarse a hacer, ya que no solo está presente la omisión, sino que es complementada con la negativa de realización de la acción que le corresponde. Lo que sí no puede ser modificado es el hecho de que sea cual sea la conducta, va referida a un acto propio de la función pública del sujeto.

Encontramos esta figura típica de nuestro ordenamiento jurídico en nuestro Código Penal, observado en el artículo 332 y versa así:

Artículo 332.-

“Será reprimido con pena de inhabilitación de uno a cuatro años, el funcionario público que ilegalmente omita, rehúse hacer o retarde algún acto propio de su función.

Igual pena se impondrá al funcionario público que ilícitamente no se abstenga, inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuanto esté obligado a hacerlo”.

Del texto se desprende que estamos ante un delito de omisión. Es necesario que la omisión realizada tenga un carácter ilegal que otorga a la acción los matices antijurídicos y típicos, convirtiéndolo así en un tipo penal sancionable.

Es un delito de mera actividad; no necesita que se dé un resultado determinado. Basta con la sola realización de cualquiera de las conductas mencionadas para que se cumpla el tipo, aun sin mediar daño alguno. Este delito no acepta la tentativa, por cuanto se apega al criterio de que en los delitos de omisión, no se da la tentativa, y debido a que los tres verbos en cuestión son variables de omisiones, la tentativa en este caso específico no es viable.

El autor o autora tendrá que ser necesariamente una persona funcionaria o empleada pública que esté en el ejercicio de sus funciones o tareas. Es lo que se llama delito de propia mano, por lo que resulta prácticamente imposible la actuación por parte de cómplices, aunque sí es posible la instigación y puede en ocasiones darse la coautoría.

Este delito es de carácter doloso *—aunque algunos autores como Soler lo consideran culposo por tratarse de la simple actuación negligente de la persona funcionaria; pero esta tesis es de carácter minoritario y es poco tomada en cuenta.* Requiere que se conozca el carácter del acto omitido como propio de su función y, por lo tanto, su omisión resulta ilegal, siempre que la omisión sea libremente ejercida, dándose de esta manera un dolo directo.

Con este delito, se tutela el desenvolvimiento normal y diligente de la Administración Pública. Lo que se castiga es el incumplimiento en la ejecución de los actos.

Capítulo III - Análisis Jurisprudencial

Durante el desarrollo de este trabajo, fue palpable el hecho de que estos delitos no son los más incoados de los tipos penales, y por lo general, por tratarse de delitos de carácter subsidiarios, forman algún tipo de concurso con otros delitos también pertenecientes a los delitos contra los deberes de la función pública, contemplados en el Título XV de nuestro Código Penal. La jurisprudencia respecto al tema es un poco escasa, sin embargo, su análisis resultará enriquecedor para este tema.

Res: 2008-00306/ Exp: 01-000914-0609-TP de las diez horas treinta y cinco minutos del dieciséis de abril de dos mil ocho. Delito de favorecimiento personal, incumplimiento de deberes, abandono de incapaz y prevaricato. En esta sentencia, podemos observar dos situaciones muy importantes en lo que a nuestro tema atañe. La primera de ellas es si estamos en presencia o no de una persona funcionaria pública, porque de no estarlo, resultaría imposible que se configure el tipo penal de abuso de autoridad donde el sujeto activo es y será siempre una persona funcionaria pública.

Encontramos la segunda de las situaciones respecto a cuál tipo penal debe ser aplicado al delito cometido en este caso, ya que la Ley General de la Administración Pública contempla algunos supuestos que deben ser tomados en consideración, y cuya sanción no va hacia lo penal, sino que tiene carácter disciplinario y/o patrimonial, según sea el caso. Respecto al primer punto la sentencia indica:

Por último, el tipo penal del incumplimiento de deberes se refiere, de forma exclusiva, a los funcionarios públicos (artículo 332 ibídem) y el acusado se desempeñaba como director de un colegio privado, financiado, según se estableció en el fallo, con fondos igualmente privados, amén de que la misma conducta no puede ser, a la vez, incumplimiento de deberes y favorecimiento personal, ya que este último delito es de naturaleza especial frente al primero, cuando sea cometido por funcionarios públicos. Por las razones expuestas, se rechazan las quejas.

También cabe deducir que por esta misma característica de si se trata o no de una persona funcionaria pública, quedan descartadas tanto la aplicación de sanción penal como la disciplinaria, pues en este caso es un director de colegio privado; en este sentido, menciona la Sala:

Por idénticos motivos, debe desecharse el alegato de que el justiciable es funcionario público y que, en virtud de ello, le incumbía el deber de denunciar. Es claro, por una parte, que Macal Garbutt, en su carácter de director de un colegio privado, sostenido por fondos privados, no ostenta la condición de funcionario público, desde que la función que desempeña ese tipo de centros de enseñanza, por esencial que pueda catalogarse, no es pública ni ejercida a raíz de una concesión del Estado.

Como lo hace ver la sentencia, el delito fue la omisión de una denuncia y, por criterio de especialidad, el delito de incumplimiento de deberes queda en un segundo plano, y pasamos al delito especial de favorecimiento ilícito:

Asimismo, se destacó que la omisión de denunciar, cuando existe el deber legal de hacerlo, constituiría, aun en el caso de los funcionarios públicos, el delito de favorecimiento personal y no el de incumplimiento de deberes, ya que mientras este último constituye un tipo general aplicable a distintas acciones, el favorecimiento recoge una específica (la omisión de denuncia) y desplaza, por especialidad, al mero incumplimiento del deber.

Queda claro de esta forma la importancia de la determinación del sujeto activo respecto a la comisión del delito para que el tipo penal pueda ser configurado.

V. 129-F-93, a las nueve horas con veinte minutos del dos de abril de mil novecientos noventa y tres. Delito de abuso de autoridad, en perjuicio de los deberes de la función pública.

En el presente caso, se plantea el abuso de autoridad en contra de un oficial de tránsito, quien, sin entrar a discutir si llevaba razón al emitir el parte, abusando de su autoridad, decomisa el vehículo y lo lleva remolcado con una grúa y, como si esto fuera poco, con pasajeros en el interior, creando así un concurso con otros tipos penales. En ese sentido, este fue el planteamiento de la Sala Tercera al respecto:

[...] aún así no existe ninguna razón viable para tener por justificada la conducta del imputado, porque su actuación arbitraria no se centra en haber confeccionado un “parte de tránsito” cuando no debía hacerlo, hecho del que la acusada puede defenderse ante la respectiva autoridad jurisdiccional que conozca de la infracción, sino fundamentalmente porque procedió a detener el vehículo en que viajaba la ofendida sin justificación alguna y lo trasladó a los planteles de la Dirección General de Tránsito utilizando un vehículo grúa, sin darle ninguna oportunidad a su víctima de retomar el automotor. En realidad en ello se evidencia un absoluto menosprecio a los derechos constitucionales de los ciudadanos, cuando los oficiales de tránsito y los conductores de las grúas que los acompañan, se llevan un vehículo aún cuando su conductor esté dispuesto a quitarlo -suponiendo que está mal aparcado-. En ello consiste la actuación arbitraria del acusado, según los términos del artículo 329 del Código Penal, y peor aún cuando trasladan el vehículo sin importarles que lleva personas dentro, pues en este último caso no sólo se configura (concurso ideal) el delito de abuso de autoridad, sino también el de privación de libertad agravada (artículo 192 inciso 4º del Código Penal), que tiene una sanción de dos a diez años de prisión, y además exponen a los ciudadanos a un peligro inminente para su integridad física, al llevárselos dentro del vehículo remolcado como si se tratara de simples objetos. Definitivamente constituye una grave y arbitraria actuación la del funcionario público que prevaleciendo de su posición de autoridad decomisa un vehículo a un ciudadano, sin que exista alguna causa legal que así lo autorice, supuestamente para mantener despejadas las vías, en aquellos casos en que el propio conductor está dispuesto a quitarlo del lugar y llevárselo.

Esa autorización legal no existe, siquiera, cuando el oficial de tránsito constata alguna infracción a las disposiciones relativas al estacionamiento de vehículos en vías públicas. En este sentido es conveniente reafirmar que la ley de tránsito vigente no autoriza decomisar y trasladar vehículos en esas circunstancias. Y aún debe agregarse que tampoco lo permite el texto aprobado recientemente y por segunda vez en la asamblea Legislativa, pues la nueva ley condiciona el traslado de vehículos a que el conductor no esté presente, o que estándolo, las condiciones mecánicas del automotor le impiden circular, o que el conductor no quiera trasladarlo o no pueda hacerlo por alguna circunstancia determinada (ebriedad, herido en el accidente, etc.).

Efectivamente, la actuación de este oficial de tránsito resulta constitutiva del delito de abuso de autoridad, ya que el hecho de remolcar el automóvil, de acuerdo con la ley aplicable en ese momento, únicamente puede llevarse a cabo en determinados supuestos, y la situación tratada aquí no cabe en ninguno de ellos, por lo que se instituye el abuso de autoridad por parte de este oficial de tránsito.

Conclusiones

Según el recuento de lo analizado, podemos concluir que nos encontramos frente a dos tipos penales propios del área de “delitos contra los deberes de la función pública”. El primero de ellos, el abuso de autoridad, es un delito de carácter subsidiario. Hay que verificar antes las otras conductas típicas especiales: prevaricato, allanamiento de morada, etc. Posee dos verbos típicos: ordenare y cometiére. Sus elementos accesorios son que el delito se cometa abusando de su cargo que consiste una irregularidad o una ilicitud en el funcionamiento de las actuaciones del funcionario público; que sea un acto arbitrario, entendido este como acto ilegal; el uso incorrecto o improcedente de una facultad jurídica y que sea en perjuicio de los derechos de alguien.

El sujeto activo será siempre la persona funcionaria pública; el pasivo primordial, el Estado y, el secundario, la persona particular (perjudicada), por lo que es indeterminado. El delito de carácter DOLOSO atiende al dolo directo, en donde la persona funcionaria quiere abusar de su autoridad, sabiendo que la actuación realizada es contraria a la ley.

El bien jurídico tutelado es la Administración Pública y la legalidad de los actos y el funcionamiento de la misma, la cual producto de actos arbitrarios puede verse comprometida.

Por su parte, el segundo de ellos, el incumplimiento de deberes es un delito básicamente omisivo. Posee varias acciones o verbos típicos: omite, rehúse hacer, retarde, no se

abstenga, no se inhiba, no se excuse, las cuales de una u otra forma son omisiones de actuaciones esperables de una persona funcionaria pública.

Como elementos accesorios, encontramos que este acto debe ser cometido ilegalmente y debe ser propio de su función; además debe realizarse ilícitamente y debe estar obligado a hacerlo. En cuanto al sujeto activo, será la persona funcionaria pública, por lo que se llega a la conclusión de que este es un delito de los llamados de propia mano. También admite la instigación y la coautoría, pero es casi imposible la existencia de cómplices.

El sujeto pasivo será el Estado, ya que su incumplimiento es para quien le da este cargo de confianza. También este acto es un delito de mera actividad, porque con la sola omisión, ya se configura el tipo penal y es de carácter DOLOSO, pues necesita el carácter volitivo del sujeto.

El bien jurídico tutelado es el desenvolvimiento normal y diligente de la Administración Pública. Lo que se castiga es la incuria genérica, es decir, el incumplimiento en la ejecución de los actos.

Aunque ambos tipos son de corte similar, la diferencia se hace evidente con el hecho de que el abuso de autoridad requiere de la realización de una acción para su configuración. En cambio, el incumplimiento de deberes se refiere a la ausencia de una actuación esperada por parte de la persona funcionaria.

Referencias

Creus, C. (1993). *Derecho Penal Parte Especial*. Tomo 2. 4ª Edición Actualizada. Buenos Aires, Argentina: Editorial Astres de Alfredo y Ricardo Depalma.

Fontan Balestra, C. (1995). *Derecho Penal Parte Especial*. 14º Edición Actualizada por Guillermo A.C. Ledesma. Buenos aires, Argentina: Abeledo Perrot. **Páginas Web**

<http://www.estadonacion.or.cr/Info2005/Paginas/fortalecimiento.html>

http://ministeriopublico.poderjudicial.go.cr/publicaciones/boletines_jurisp/2000/JUR45-00.pdf

[http://es.wikipedia.org/wiki/Abuso de autoridad](http://es.wikipedia.org/wiki/Abuso_de_autoridad)

<http://www.prensalibre.co.cr/2008/julio/02/sucesos01.php>

<http://www.iiij.derecho.ucr.ac.cr/archivos/documentacion/inv%20otras%20entidades/>

[CLAD/CLAD%20XI/ documentos/navasron.pdf](http://www.clad.clad%20XI/documentos/navasron.pdf)

<http://www.estadonacion.or.cr/Info1996/Paginas/cap-5c95.htm>

http://www.imprenal.go.cr/pub/2008/06/25/COMP_25_06_2008.html#_Toc2020648

